

El teatro y la Administración

de que el Estado subvencionara en teatros oficiales, campañas y festivales, el montaje de los clásicos, y que, sin embargo, se hicieran mal y rutinariamente. Que nadie encontrara -esto son descubrimientos colectivos que no puede suplir ninguna dedicación individual- el modo de "decir el verso", de reimaginar un texto, de acercar la obra a nuestros días. Cuando, a veces, como en "La Estrella de Sevilla", dirigida por González Vergel, o en el montaje de Marsillach de "Los siete infantes de Lara", se rompían los caminos tradicionales y aparecían las imágenes enfermizamente heroicas de la Historia de España, se producía el rechazo. No sólo oficial, sino, incluso, de muchos que, teóricamente adscritos a una visión crítica, lamentaban las reveladoras fisuras, la falsedad última de ciertas situaciones, que tales montajes ponían de manifiesto.

La propuesta está, pues, sin resolver. Pero a la política teatral sólo le va a quedar el papel secundario de dar fe de algo que le excede: la existencia o inexistencia de una cultura, de una realidad social, dispuesta o no a enfrentarse críticamente con las grandes manifestaciones de su pasado. Si el franquismo buscaba la "grandeza" sin crítica, si la ingenuidad renuncia a la memoria y quiere partir de cero, queda por saber si estos nuevos tiempos contribuirán a que los españoles se interesen por ciertas obras del pasado como parte viva y constitutiva de su actitud crítica. Ahí entra todo el gran problema de nuestros clásicos. ■ J. M.

Teatro en las empresas

Hace unas semanas hablábamos aquí de la Muestra Teatral de las Universidades Laborales, celebrada en Gijón, y de algunos de los problemas que en ella se plantearon. Para mí, más allá de las características de las funciones programadas, más allá de la inequívoca buena voluntad de los organizadores de la Muestra, la cuestión fundamental era la voluntad de muchos de los participantes de cambiar el marco paternalista en que se desenvolvía su actividad teatral. La exigencia -articulable en un cuadro general de exigencias coherentes- tenía el matiz específico de proceder del campo laboral y

Vamos a ver lo que cambia y cómo cambia. El problema es complejo y la amenaza de palabrería, estremecedora. Habrá que ir combinando, en todo caso, los análisis y los compromisos globales con el examen resuelto de una serie de puntos precisos, concreciones terminantes de la "situación real", ante los cuales habrá que actuar y definirse.

En el campo específico del teatro, por ejemplo, si es verdad que la izquierda acaba de ganar una parcela de poder -siquiera en la oposición-, procede reivindicar de inmediato el valor social y cultural de una actividad que, despreciada por la Administración durante años, corre ahora el peligro de verse aún más minimizada por la pugna económica de los distintos intereses privados.

Vayamos a un punto preciso, que ahora se debate: la permanencia del Ministerio de Información y Turismo. Ministerio, en realidad, de Turismo, Censura y Propaganda, en cuyo marco han vivido siempre precariamente cuantas iniciativas no vincularan la Promoción Cultural al robustecimiento de la Imagen Bienhechora del Régimen. El Ministerio ha sido -no habría más que repasar los informes de los Consejos de Ministros-, en su proyección pública, una agencia de turismo, todo lo fundamental que se quiera para nuestra economía; más solapadamente, un centro de control de la prensa, de las editoriales, del teatro, del cine, de la radio y de la televisión. Una trinchera desde la que se ha vigilado el cumplimiento de los "principios fundamentales" y, paralelamente, se han subvencionado o mantenido aquellas expresiones que los afirmaran. Las excepciones han sido esporádicas y pronto liquidadas. El Ministerio -y bastaría recordar, por hablar de un ministro reciente, la gestión de Sánchez Bella, desde el cierre del diario "Madrid" a su inolvidable discurso en las Cortes sobre las ideologías vencidas y vencedoras- ha sido, en lo que a política cultural se refiere, una antesala de la Dirección General de Seguridad. Durante años y años, los hombres de teatro han ido al Ministerio, en su inmensa mayoría, a presentar obras a censura. O a suplicar la ayuda económica que les permitiera cubrir parcialmente sus pérdidas. Pero una política teatral abierta, consecvente con una valoración mínimamente democrática del hecho teatral -expresión artística de la condición humana en una determinada realidad social-, tanto en sus niveles de creación como en los de su público, eso no lo ha habido jamás, sin duda porque hubiera sido contrario a los criterios imperantes de gobierno.

El hecho de que, a lo largo de tantos años, se hayan producido fisuras y que determinados funcionarios hayan tenido una visión distinta de sus obligaciones, no hace sino reafirmar la regla dominante. En general -y uno podría referirse a gentes como García Escudero o Francisco Mayans-, tales personas han actuado mucho más "bloqueadas" por el Ministerio que estimuladas por él. El que a la hora de reformar la situación, el Gobierno -o, más exactamente, los dos Gobier-

nos de la Monarquía- se hayan limitado, en lo que al teatro se refiere, a suavizar los criterios de censura, sin plantearse paralelamente ninguna modificación del ordenamiento teatral, reafirma hasta qué punto la posición del poder frente a esta manifestación está más hecha de criterios policiales -al fin y al cabo, históricamente, el absolutismo "toleró" el hecho teatral por los beneficios que producía a determinadas cofradías religiosas- que culturales. A la intransigencia del franquismo habría sucedido la tolerancia del reformismo. Y punto.

Todo esto nos conduce a una conclusión inequívoca. La actual Dirección General de Teatro, en el marco del actual Ministerio de Información y Turismo, no es el aparato idóneo para abordar la política cultural que corresponde a una situación democrática. No es un problema de personas ni de subvenciones, sino de estructura y de capacidad de actuación. Necesitamos un organismo, en el que intervengan eficazmente representantes de nuestro mundo teatral, que consiga conjugar, de un modo realista, las distintas peticiones de los diversos sectores e ideologías, al servicio de un interés fundamental y del que se habla poco en el teatro: el interés de la sociedad española. En función del cual habrá que trabajar, con carácter prioritario, para alcanzar un teatro libre, ensayado y representado con responsabilidad artística y abierta a la gran mayoría.

Conseguir esto presupone una nueva ordenación del teatro. Y el "rescate" público -como ha ocurrido en otros países de constitución política demoliberal- de buena parte de la actividad teatral, a la que es necesario salvar, si no queremos que sea ridículamente minoritaria, tanto de la burocracia policíaca como del mecanicismo implacable de los intereses privados. A las Asambleas de Actores, a las reuniones de empresarios de sala, a los grupos independientes, a la agoda de los empresarios de compañía, a las peticiones de los técnicos, etcétera, etcétera, sólo puede responder un organismo activo, que cuente con representantes de todos los sectores, que ponga todas las cifras al descubierto, y emprenda una gestión realista y ambiciosa, al servicio claro de la sociedad, llevando al seno del Gobierno -sin el tono vergonzante de tantos años- el tema del teatro. Las crisis económicas en que andamos metidos y el criterio -y, a menudo, el abuso- de tantas posiciones del ámbito teatral exigen un replanteamiento a fondo del tema, que contemple los problemas culturales, artísticos, sociales, económicos, políticos y laborales, que actualmente aparecen en conflicto.

¿Cómo imaginar esto con el teatro en manos de un Ministerio como el de Información y Turismo? Desde esta columna, tras el descaloro ganado en las elecciones, va un "no" -otro más- a la permanencia de un Ministerio que, buenas intenciones de unos pocos aparte, ha sido una losa para el desarrollo del teatro español. Y que no tiene sentido si la Censura y la Propaganda se archivan como funciones de gobierno. ■ J. M.